

# TRANSICIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DURANTE EL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN (1990-1993): LA ESTRATEGIA DE LAS CUERDAS SEPARADAS <sup>1</sup>

*Transition and democratization during Patricio Aylwin government (1990-1993): the strategy of separate strings*

Marcelo Mella Polanco<sup>2</sup>  
Universidad de Santiago de Chile  
Santiago, Chile  
marcelo.mella@usach.cl

Vol. XII, n° 21, 2014, 11-44  
Fecha de recepción: 30 de junio de 2014  
Fecha de aceptación: 9 de diciembre de 2014  
Versión final: 26 de diciembre de 2014

---

<sup>1</sup> Este artículo ha sido elaborado en el marco de los proyectos “Coaliciones gubernamentales en regímenes presidenciales: análisis de los mecanismos de formación, mantenimiento y disolución en los casos de Uruguay, Argentina y Chile (1983 a 2010)”, financiado por DICYT, Universidad de Santiago de Chile, código 031152MP, y “Contexto histórico y dinámicas políticas de la insurgencia armada en Chile (1978-1994)”, financiado por FONDECYT Regular, código 1130323.

<sup>2</sup> Profesor Asociado, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile; Doctor en Estudios Americanos, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile; Magíster en Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile; Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

RESUMEN. En este artículo se sostiene que el objetivo básico del gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1993) fue generar condiciones para la estabilización y consolidación de la democracia en Chile después de la experiencia de 17 años de autoritarismo. Se observa en este análisis que las narrativas impuestas por el primer gobierno concertacionista posibilitaron la implementación exitosa de la transición, aunque al mismo tiempo definieron los límites del proceso democratizador. Las preguntas que abordaremos son las siguientes: i) ¿Qué ideas constituyen el repertorio básico para el posicionamiento estratégico del gobierno del presidente Aylwin?; ii) ¿De qué manera dichas narrativas transforman el posicionamiento de los partidos que integran la coalición gubernamental?; y finalmente, iii) ¿Este repertorio fue factor o índice frente al contexto histórico político?

*Palabras clave:* pensamiento concertacionista; transición; democratización; coaliciones políticas

ABSTRACT. This article argues that the basic objective of the government of President Patricio Aylwin (1990-1993) was to create conditions for the stabilization and consolidation of democracy in Chile after the experience of 17 years of authoritarianism. Observed in this analysis, the narratives imposed by the first Concertacionista government allowed the successful implementation of the transition, although at the same time, defined the limits of the democratization process. The questions we will address are: i) What ideas are the basic repertoire for the strategic positioning of President Aylwin?; ii) How these narratives transform the positioning of the parties that form the coalition government? And finally, iii) In what sense was this repertoire factor or index opposite the historic political context?

*Keywords:* concertacionista thinking; transition; democratization; political coalitions

## Introducción

En este artículo se sostiene que el objetivo básico del primer gobierno concertacionista (1990-1993) fue generar condiciones para la estabilización y consolidación de la democracia en Chile después de la experiencia de 17 años de autoritarismo. Este resultado fue posible en la medida en que la administración del presidente Patricio Aylwin constituyó no solo una mayoría electoral y un contingente parlamentario necesario para asegurar gobernabilidad, sino principalmente una narrativa<sup>3</sup> orientada a construir “anclaje en las organizaciones partidistas”

---

<sup>3</sup> Utilizamos la noción de “narrativa política” para referirnos a un relato (acto del habla) que representa de forma coherente una determinada reconstrucción de la realidad en el contexto de interacciones estratégicas, lo que implica identificación de sujetos y actores (más o menos

(Morlino, 2009: 125-126). Entre estas nuevas narrativas se cuenta la crítica *antile-ninista*, surgida de diversos referentes ideológicos en la izquierda frente al fracaso de la Unidad Popular (Mella, 2011) y a través de la cual se renunciaba a la función de vanguardia y al uso político de la violencia (Castañeda, 1993; Santiso, 2006).

Por cierto, existieron otras narrativas políticas durante el período que justificaron el uso del enfrentamiento violento frente al régimen de Pinochet. Este fue el caso de la línea estratégica del Partido Comunista en el período 1977 a 1990, la que se desplazó, sucesivamente, desde la tesis del “Frente antifascista” a la “Política insurreccional de masas” y al enfoque de la “Salida avanzada” (Moulian y Torres, 1988; Valdivia, Álvarez y Pinto, 2006; Álvarez, 2011; Rojas, 2011). Sin embargo, estos conceptos perdieron centralidad y eficacia política debido a una constelación de factores externos e internos, uno de los cuales sin duda fue la creciente capacidad “movilizadora” de las narrativas gradualistas (Garretón, 1988). Entendemos por narrativas gradualistas a aquellos relatos definidos por la creencia de que los cambios efectivos son aquellos generados mediante un proceso paulatino y progresivo, luego de haber consolidado una mayoría social y política favorable a las reformas.

Sutilmente, nuevos repertorios categoriales fueron interiorizados por la oposición gradualista durante la década de 1980, posibilitando no solo la innovación estratégica de los actores políticos, sino también una profunda reformulación de la racionalidad en cierto sector de la oposición a Pinochet (Mella, 2008; Bermeo, 1992). Así, los giros narrativos y discursivos de la Concertación, entendidos como “ajustes de cuenta” frente a creencias operantes en el pasado reciente de la izquierda, redefinieron los sentidos para la acción y trastocaron las narrativas operantes para las decisiones de los actores estratégicos durante el primer gobierno postautoritario (Flisfisch, 1984; Flisfisch, 1987; Resnik, 1998). Estos cambios se expresaron en el ritmo, orientación y profundidad de las reformas impulsadas, en los niveles de diferenciación programática, en los debates sobre la justicia transicional y derechos humanos, y, sobre todo, en la recuperación de la propensión coalicional de los partidos Demócrata Cristiano y Socialista (Mella, 2011; Dezalay y Garth, 2002).

Argumentamos en este artículo que la administración de Patricio Aylwin contribuyó a la configuración de una nueva matriz hegemónica en Chile, mediante la recepción de conceptos provenientes de las ciencias sociales desarrolladas bajo la experiencia de resistencia al autoritarismo, herederas del trauma del fracaso del

---

relevantes), de sus características idiosincráticas, modos de relación, objetivos y restricciones para la acción política, estrategias y medios disponibles. En este sentido, la “narrativa” como “acto del habla” busca transmitir un mensaje a uno o más destinatarios para obtener de él (ellos) determinadas respuestas. Suponemos que los desplazamientos en la narrativa de un actor, en tanto modos de interacción con otros actores, constituyen el resultado de procesos adaptativos con el entorno y la experiencia (aprendizaje político). Un análisis con estas características hace posible comprender los mecanismos evolutivos que subyacen a la modificación de creencias (y por tanto, de valores y normas) por razones de necesidad en los actores políticos. En relación a la teoría de los “actos del habla”, véase John Austin (2008) y John Searle (1997). En relación a la teoría evolutiva de las normas, véase Robert Axelrod (1984 y 1997).

proyecto de la Unidad Popular y refundadas dentro del circuito internacional de progresismo iconoclasta. En este contexto, se describirá el posicionamiento discursivo de Aylwin, quien, no obstante participar de manera activa en la coyuntura de 1973 como opositor al gobierno de Allende, pudo liderar después de 1990, una coalición gubernamental gradualista, que contribuyó a la generación de un nuevo equilibrio en el sistema político. Específicamente, nos preguntaremos sobre los efectos de las restricciones que afectan al uso del poder presidencial durante el gobierno de Aylwin en lo concerniente a la elaboración de creencias sobre el proceso transicional y la democratización. Las preguntas que abordaremos son las siguientes: i) ¿Qué creencias constituyeron el repertorio básico para el posicionamiento estratégico del gobierno del presidente Aylwin?; ii) ¿De qué manera dichas narrativas transforman las definiciones estratégicas e ideológicas de la coalición gubernamental? y finalmente; iii) ¿Este repertorio fue índice o factor frente al conjunto de restricciones para la toma de decisiones derivadas del contexto histórico y político?

Para el caso de Chile, el bajo grado de reformas institucionales durante el período del presidente Aylwin sugiere que existió desincronía entre los procesos de transición y democratización, confirmando dos afirmaciones reiteradas en la literatura transitológica (O'Donnell y Schmitter, 1988; Garretón, 1988; Przeworski, 1995):

- a) Que la transición puede definirse más como una estrategia de salida frente al autoritarismo, que como un proceso encaminado a la construcción de un régimen democrático, por tanto;
- b) Que puede existir cierta asincronía entre los procesos de transición y democratización, en cuanto pueden ser “portafolios” gestionados de manera no simultánea. La estrategia de “cuerdas separadas” refiere a asuntos que, aunque ligados en cierta forma, pueden ser tratados por separado, atendiendo a razones de “economía procedimental”.

El análisis partirá por una descripción breve del contexto transicional, relevando las correlaciones de poder surgidas de la confrontación política y de los procesos electorales precedentes, como una forma de identificar las principales restricciones que limitan el uso del poder presidencial. Luego se identificarán características generales de la transformación del pensamiento democratacristiano chileno, desde la década de 1960, donde el PDC defendía la tesis de un camino propio, a la década de 1990, momento en el que este partido se constituye en pivote de un gobierno de coalición. En tercer lugar, examinaremos los modos de relación del gobierno de Aylwin con sectores que propiciaban estrategias alternativas en la coyuntura transicional. Posteriormente, se analizará la “política del consenso” y la “democracia de los acuerdos”, como repertorios que aportan estabilidad al sistema. Para terminar, se indagará en las creencias que configuran la compleja fórmula hegemónica de la Concertación, caracterizada por una limitada integración vertical.

## El contexto transicional

Estudios anteriores han identificado un conjunto de “enclaves de la transición” (Garretón, 1991; Siavelis, 2009), con tendencia a destacar su carácter institucional y a explicar con ello, los obstáculos para el proceso de democratización. En nuestro caso, y sin menospreciar el “factor Pinochet” (Angell, 2007), nos interesa identificar factores que no se agotan en el diseño institucional y que operaron como restricciones para la gestión política del primer gobierno de la Concertación.

Con la victoria de Patricio Aylwin como candidato de la Concertación, en diciembre de 1989, no solo finalizaron 17 años de autoritarismo, sino que se dio inicio a una extensa etapa de cuatro gobiernos consecutivos de coalición en Chile. Estos gobiernos constituyeron experiencias de innovación estratégica y de conservadurismo programático (Moulian, 1997; Mella, 2008 y 2011; Dingemans, 2011); paradoja que solo resulta comprensible cabalmente, si se identifican condiciones contextuales que constituyeron el marco de oportunidades y restricciones para la acción política del presidente Aylwin.

En la elección presidencial de 1989, Aylwin obtuvo la primera mayoría con 3.850.571 votos, equivalente al 55,17%; le siguió el candidato de la derecha, Hernán Büchi Buc, con 29,40%, y finalmente, el independiente Francisco Javier Errázuriz Talavera, con 15,43%. Estos resultados reflejaban un apoyo mayoritario para Aylwin, disminuyendo las restricciones iniciales que afectaron a los presidentes “minoritarios” durante el siglo XX, entre los que se cuentan: Gabriel González Videla, en 1946 (40,1% apoyo electoral); Carlos Ibáñez del Campo en 1952 (46,8% apoyo electoral); Jorge Alessandri en 1958 (31,2% apoyo electoral); y Salvador Allende en 1970 (36,5% apoyo electoral) (Valenzuela, 1978; Urzúa-Valenzuela, 1984).

En la Cámara baja, la lista Concertación por la Democracia alcanzó 51,49% de los votos, con 69 diputados electos y la lista de la derecha, Democracia y Progreso, 34,18% de los votos, con 48 diputados electos (todos estos resultados sobre un total de 120 escaños). A nivel de partidos, los resultados en la Cámara baja instalaron a la DC como partido mayoritario, a saber: 25,99% de los votos y 38 diputados electos. Este fue seguido por Renovación Nacional con 18,3% de los votos y 29 diputados electos; el Partido por la Democracia (PPD), con 11,5% de los votos y 16 diputados electos; y la Unión Demócrata Independiente (UDI), con 9,8% de los votos y 11 diputados electos.

El contingente parlamentario de Aylwin alcanzó 57% (diputados), correlación que, aun cuando expresó una clara mayoría para la Concertación, no permitía garantizar la implementación cabal del programa de gobierno, debido a la vigencia de los quórum de supermayoría definidos por la Constitución de 1980 y la capacidad de veto mantenida por sectores proclives al statu quo en diferentes espacios institucionales: senadores designados y vitalicios, COSENA, Tribunal Constitucional. Si bien, 57% en la Cámara baja aparecía próximo a la barrera de los 4/7, todavía distaba de los 3/5 necesarios para las reformas de mayor envergadura. Con todo, la supremacía de la DC sobre el PPD (13% de escaños en diputados), a la

sazón, segundo partido de la coalición de gobierno, se tradujo en la ausencia de un contrapeso programático interno para el partido pivote de la coalición oficialista.

Renovación Nacional (RN), con 24% de diputados electos, se constituyó en el segundo partido a nivel nacional y en el principal factor de viabilidad de las reformas, generando un poderoso incentivo para la moderación programática de la Concertación durante su primera administración. La llamada “democracia de los acuerdos” (Concertación más RN) constituyó la estrategia gubernamental básica que impulsó los proyectos de reforma (Cavallo, 1998; Serrano y Cavallo, 2006), considerando que el otro partido de la oposición (la UDI), se caracterizaba por una actitud de defensa férrea de la institucionalidad autoritaria.

La “democracia de los acuerdos” respondía a la lógica de distribución de beneficios entre “reformistas” y “blandos” que caracterizó al saber experto transitológico durante la segunda mitad de la década de 1980 (O’Donnell, 1988). Edgar-Boeninger (1997) señala que los principales desafíos del gobierno de Aylwin fueron “fortalecer los consensos básicos” y “reconstruir el sistema político”. La estrategia de apoyo a acuerdos amplios y colaboración con el gobierno en ciertas reformas importantes, liderada en RN por su presidente Andrés Allamand, estuvo vigente con vaivenes durante todo el período del primer gobierno concertacionista (Serrano y Cavallo, 2006). Esta dinámica de colaboración, particularmente visible en el trabajo parlamentario, estuvo condicionada a que RN mantuviera su condición dominante y de autonomía dentro de su sector, permitiendo concretar en los primeros años de la presidencia de Aylwin procesos como la reforma municipal, la reforma tributaria, la reforma laboral, el cambio en la duración del período presidencial y una solución al problema de los denominados “presos políticos” (Boeninger, 1997: 433-437).

Además de las complejidades en la vinculación gobierno-oposición, derivadas de las correlaciones generadas en el Poder Legislativo luego de las elecciones de 1989, las condiciones para la construcción de gobernabilidad dentro de la coalición gubernamental determinaron consecuencias no solo estratégicas, sino también programáticas. Particularmente, el rol del partido del presidente (partido pivote) y su poder en la coalición constituyeron condiciones concretas para la gestión del gobierno, el mantenimiento de la coalición y la capacidad de implementar su programa (Boeninger, 1997).

Podemos suponer, entonces, que a mayor poder del partido del presidente (entendido como control de escaños), son menores los costos de transacción del gobierno para la gestión política en el Congreso. Algo similar ocurre con el mantenimiento de la coalición, pues cuando el partido del presidente es más poderoso queda menos expuesto al chantaje de los partidos minoritarios. En sentido contrario, un partido pivote que controla pocos escaños tiene costos mayores para construir acuerdos dentro de la coalición y con partidos opositores.

Los datos del Cuadro 1 muestran la evolución del porcentaje de escaños controlado por el partido pivote de la coalición (% part. Pte.) y del Índice de Necesidad Coalicional (INC) (Chaisty, Cheeseman y Power, 2012), desde 1937

(Arturo Alessandri) hasta 1989 (Patricio Aylwin)<sup>4</sup>. Dicho índice permite calcular en una escala de 0% a 100% la exigencia o demanda de formación de coalición parlamentaria para el Poder Ejecutivo en un momento determinado, observando el porcentaje de apoyo del partido del presidente y el partido calculado por escaños (Número efectivo de partidos, NEP). (Chaisty, Cheeseman y Power, 2012: 7). Para nuestros propósitos, constituye una estimación de las restricciones que enfrenta el presidente para el uso efectivo de sus facultades y capacidades (formales e informales) que comprende la “caja de herramientas” (*executive toolbox*) en el presidencialismo chileno, tales como poder de agenda, gestión de carteras ministeriales, control presupuestario, entre otras (Raile, Pereira & Power, 2010). Como limitaciones, este índice no considera la distancia ideológica y el impacto de los clivajes o conflictos entre socios de una coalición; ambos factores necesarios para una comprensión más sofisticada del funcionamiento de la Concertación.

CUADRO 1. PODER DEL PARTIDO PIVOTE (% DE ESCAÑOS)

Año	NEPv	NEPs	Seats	Presidente	Part. Pte.	% Part. Pte.	INC
1937	6,93	5,75	147	A. Alessandri		18,70	46,75
1941	6,5	5,55	147	P.A. Cerda	PR	21,83	43,38
1945	6,64	5,25	147	J. A. Ríos M.	PR	20,00	42,00
1949	7,07	6,02	147	G. González V.	PR	21,70	47,14
1953	11,89	9,01	147	C. Ibáñez	P. Agra.-Lab.	17,69	74,16
1957	8,6	6,76	147	J. Alessandri	Indep.-P. Lib.	20,41	53,80
1961	6,44	5,89	147	J. Alessandri	Indep.-P. Lib.	19,05	47,68
1965	4,06	2,8	147	E. Frei M.	PDC	55,78	12,38
1969	4,92	4,08	150	S. Allende	PS	10,00	36,72
1973	5,1	4,45	150	S. Allende	PS	18,00	36,49
1989	7,79	5,31	120	P. Aylwin	PDC	31,67	36,28

Fuente: elaboración propia con datos del Servel

<sup>4</sup> El INC se obtiene multiplicando el número efectivo de partidos calculado por escaños (NEP), por el inverso del porcentaje de escaños ocupados por el partido del presidente (% Part. Pte.) y, posteriormente, el resultado se divide por 10 para una mejor interpretación.

Se observa, que los resultados en 1989, en materia de fragmentación partidaria, control de escaños en el Congreso por el partido del presidente y necesidad gubernamental de una coalición parlamentaria, mejoran las condiciones promedio para el período 1937 a 1973. Por ejemplo, considerando el NEP, en la elección de 1989 existían 5,31 partidos, lo que se encontraba levemente por debajo del promedio preautoritario (1937-1973), a saber 5,6 partidos. En porcentaje de escaños controlados por el partido del presidente, el PDC obtiene en 1989, 31,67% de los escaños de la Cámara baja, siendo esta magnitud superior al promedio preautoritario que solo alcanzó 22,3%. Como se podrá apreciar, el INC para el gobierno de Aylwin en 1989 alcanzó 36,28, representando restricciones para la construcción de acuerdos intracoalición y uso efectivo de las facultades presidenciales inferiores al valor promedio (INC 1937-1973 = 44,1) en la fase 1937-1973. Pero aunque las restricciones “objetivas” para Aylwin no fueron las más altas, existía un conjunto de actores y subactores que representaban amenazas de estancamiento o regresión en el proceso transicional (Campero & Cortázar, 1988).

Sin duda, en la configuración de creencias del primer gobierno de la Concertación una dimensión relevante fue la representación de las amenazas más allá del sistema de partidos y de los equilibrios resultantes de la configuración del Congreso en 1990. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter (1988) señalaban que dos limitaciones o “restricciones” mayores que enfrentan las transiciones desde el autoritarismo consisten en los niveles de confianza de empresarios y fuerzas armadas (FF.AA.) frente al predominio del “núcleo consolidador”. El supuesto de que empresarios y fuerzas armadas constituyen actores estratégicos dotados de capacidad de veto, determina que la coalición partidaria comprometida con el impulso democratizador debe garantizar la inviolabilidad de los derechos de propiedad para la burguesía y las prerrogativas de las FF.AA. consagradas en la Constitución de 1980. Como se aprecia en el Cuadro 2, la capacidad de control del núcleo consolidador se observa en subactores dentro del movimiento sindical y movimiento de pobladores que proyectan algún nivel de compromiso con la transición y democratización posibilitadas mediante garantías. Para el caso chileno, autores como Campero y Cortázar (1988), sostenían que el principal obstáculo para avanzar en la transición consistió en que los partidos del núcleo consolidador no generaban confianzas suficientes entre estos actores estratégicos.



CUADRO 2. ACTORES DE LA TRANSICIÓN

Actores	Subactores
Partidos políticos	Duros partidarios del régimen Núcleo consolidador Núcleo revolucionario
Movimiento sindical	Consolidadores Revolucionarios Núcleo de mercado
Pobladores	Consolidadores Revolucionarios Organizaciones apolíticas
Empresarios	Gran empresa (CPC) Pequeños y medianos (CPTC)
Fuerzas Armadas	Duros Blandos

Fuente: Campero & Cortázar, 1988: 129

Se puede desprender de lo anterior, que las principales amenazas que enfrentó el gobierno de Aylwin no tuvieron que ver con el desempeño electoral de la Concertación ni con los niveles de apoyo presidencial obtenido en 1989. Las mayores restricciones se vinculaban a actores que lograron cierto desarrollo de subactores revolucionarios (partidos, movimiento sindical y pobladores) o a actores que al no internalizar la racionalidad del núcleo consolidador, podrían “golpear el tablero” (empresarios y fuerzas armadas).

### Narrativas democratacristianas

A continuación, se describirán los desplazamientos ideológicos y estratégicos de la Democracia Cristiana durante el período 1990-1993, lapso en el que ejerció como principal actor dentro de la coalición de gobierno. Esta condición de “partido pivote” también fue un factor que condicionó el carácter del liderazgo de Aylwin, delimitando un repertorio de ideas que favorecía la articulación entre el presidente y su coalición. Al mismo tiempo, las mutaciones ideológicas del partido constituyeron manifestaciones de los procesos de “aprendizaje político” desarrollados después de la experiencia del autoritarismo y de los cambios profundos en la política internacional durante la década de 1980 (Garretón, 1989; Bermeo, 1992; Roberts, 1994).

Para Nancy Bermeo (1992), el aprendizaje político consiste en “el proceso a través del cual las personas modifican sus creencias políticas y tácticas, como resultado de crisis graves, frustraciones y cambios dramáticos en el medio ambiente” (Bermeo, 1992: 274). Vale decir, las creencias de los sujetos (referidas a tácticas,

aliados, opositores, instituciones) no son fijas ni inmutables y varían en relación a acontecimientos políticos, produciendo repertorios normativos que pueden favorecer (o no) la consolidación de la democracia. Como dice esta autora, “las nuevas ideas pueden ser verdaderas o falsas, justificadas o injustificadas”, pero su importancia no deriva de su veracidad o legitimidad, sino del hecho de que se utilicen como directrices para la acción política (Bermeo, 1992: 274).

La Democracia Cristiana fue, desde su creación en julio de 1957 hasta 1973, un partido de orientación centrista provisto de cierta excentricidad (Navarrete, 2005). Este partido surge de un proceso gradual de disidencia de la juventud católica dentro del Partido Conservador, que lleva a constituir nuevos referentes, como fue el caso de la Asociación Nacional de Jóvenes Católicos, en 1928; el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, en 1935; y la Falange Nacional, en 1937. La campaña presidencial de 1938 que llevará al gobierno al Frente Popular constituyó el factor de ruptura de la Falange con el Partido Conservador, trazando una distancia constitutiva entre ambos. En los orígenes de la DC en 1957, además de la Falange Nacional, confluyen diversas agrupaciones políticas como el Partido Conservador Socialcristiano y más tardíamente, el Partido Nacional Cristiano y el Partido Agrario Laborista (Grayson, 1968).

A juicio de Tomás Moulian (1983), la DC se distinguió, durante este período, por tres rasgos: a) su condición de partido multiclasista; b) su carácter alternativista; y, c) el carácter hegemónico de sus sectores “puristas” (Moulian, 1982: 137-140). Dejando de lado el primer rasgo, que se refiere a las lógicas de reclutamiento de la militancia, las discontinuidades discursivas de la DC se expresaron en los dos últimos rasgos, esto es, en la condición de partido “alternativista” y “purista”. Ser alternativista significa que el partido poseía un proyecto propio, que lo distinguía de la vía capitalista y del socialismo. Por ello la DC, durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende fue mayoritariamente antialiancista, oponiéndose a la histórica estrategia cooperativa del radicalismo. La condición de “purismo” ideológico, en tanto, condujo al partido a defender la tesis del “camino propio”, lo que distinguió a su militancia durante los años sesenta, generando un partido de centro por definición no cooperativo. Así, la Democracia Cristiana, al mismo tiempo que consolidó su condición de partido con vocación hegemónica, desarrolló desde sus inicios hasta el quiebre de 1973 una fuerte inclinación al aislamiento (Boeninger, 1997: 122-123).

Tácticamente, la DC se caracterizó en su evolución durante la fase preautoritaria, por una manifiesta tensión con la derecha hasta el gobierno de la UP y más concretamente, hasta la configuración de la Confederación de la Democracia (CODE) como alianza electoral para enfrentar las parlamentarias de julio de 1972. Antes de ese momento, el apoyo falangista a Pedro Aguirre Cerda y la organización del Bloque de Saneamiento Democrático, en 1958, con el expreso propósito de evitar el triunfo de Jorge Alessandri, posicionaban a la DC como un partido sin mayor colaboración con los partidos de la derecha. Esto no quiere decir que los desplazamientos tácticos iniciales entre “puristas”, “populistas” y partidarios de entendimientos amplios hayan sido movimientos de fácil procesamiento en los

equilibrios internos<sup>5</sup>. Con mayor razón, el posicionamiento del partido desde la segunda mitad del gobierno de Frei Montalva y durante la UP generó divisiones profundas (Dooner, 1985; Fleet, 1985) y un debate político que trascendió el origen de la Concertación a fines de la década de 1980. La secesión del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en 1969, y de la Izquierda Cristiana (IC), en 1971, así como las diversas reacciones frente al golpe militar de 1973<sup>6</sup> demuestra el agotamiento de las tesis “puristas” y “aislacionistas” en un contexto de alta polarización que erosionó el centro político (Scully, 1992).

En los discursos del presidente Aylwin, desde 1990, aparecieron expresiones deconstructivas de la matriz doctrinaria original de la Democracia Cristiana. Uno de estos rasgos de ruptura fue el abandono de la tesis del “camino propio”. Se impuso, en cambio, la creencia de que el partido del presidente no podía ser la base exclusiva del apoyo gubernamental, sino un actor pivote dentro de una coalición con capacidad de respaldo suficiente para el Ejecutivo. Puntos de inflexión fueron la propensión cooperativa de la DC en la fase previa al plebiscito de 1988 y en el acuerdo sobre las bases programáticas de la candidatura de Patricio Aylwin (Aylwin, 1990c).

El retroceso del “alternativismo” dentro de la Concertación posibilitó mayor respaldo orgánico para el presidente y una mayor homogeneidad y cohesión de los equipos ministeriales. La superación de las intransigencias e intolerancias entre partidos opositores a Pinochet no solo fue una condición de viabilidad política para la coalición de gobierno, sino un requisito para la consolidación de la democracia y la “reconciliación de los chilenos” (Aylwin, 1990c). Al mismo tiempo, el declinar del “purismo doctrinario” en la Democracia Cristiana se apreció en el

---

<sup>5</sup> George Grayson (1968) describe el posicionamiento originario del partido hacia 1958 que se caracteriza por la dialéctica entre tres tesis políticas:

i) El “purismo” sostenía que el partido debía ser una expresión de vanguardia nacional y popular cuyo objetivo primordial sería reemplazar la economía capitalista por una de tipo “comunitaria”. En esta perspectiva, se encontraban Jaime Castillo, Óscar Calvo y Hernán Frías, quienes sostenían un papel opositor de la DC frente al gobierno de Alessandri.

ii) El “populismo” sostenía que el partido debía oponerse de modo enérgico al gobierno de Alessandri, aunque evitando el aislacionismo de los “puristas”. Para ello, se potenciaba la vinculación estratégica con el Partido Nacional Popular, tal como lo sostenían Jorge Cash, Rafael A. Gumucio, Alberto Jerez, Julio Silva, Alfredo Lorca y Luis Ortega.

iii) La tercera tesis sostenía un entendimiento amplio con otras fuerzas políticas, rechazando alianzas o pactos electorales con el PC y el FRAP. En esta perspectiva se encontraban Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, Juan de Dios Carmona, Tomás Pablo y Pedro Muga (Grayson, 1968: 334-336).

<sup>6</sup> Son conocidas las declaraciones críticas a la UP y tolerantes con el Golpe en 1973 de Patricio Aylwin (Declaración publicada en diario español ABC, el 14 de septiembre de 1973, pág. 24, disponible en <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1973/09/14/024.html>) y Eduardo Frei Montalva (Carta a Mariano Rumor, con fecha 8 de noviembre de 1973). Del mismo modo es de conocimiento público, la carta firmada por el “Grupo de los Trece” a dos días del Golpe, donde se fija una posición de rechazo frente al gobierno de Pinochet. Los militantes DC firmantes de este documento fueron: Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Andrés Aylwin, Claudio Huepe, Belisario Velasco, José Ignacio Palma, Fernando Sanhueza, Sergio Saavedra, Mariano Ruiz-Esquide, Jorge Cash, Jorge Donoso, Ignacio Balbontín, Florencio Ceballos y Renán Fuentealba.

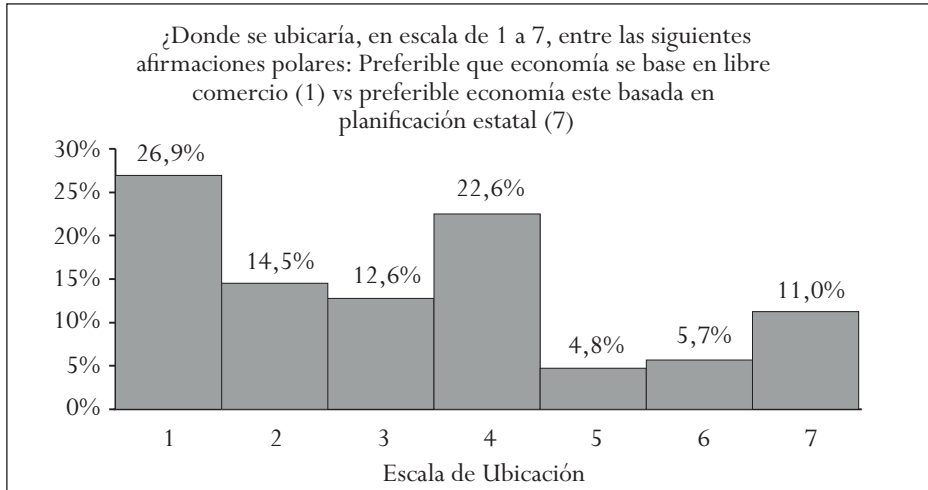
reemplazo de conceptos propios del humanismo cristiano (entre ellos, su condición anticapitalista y antimarxista), por referentes provenientes de las narrativas tecnoeconómicas.

Todos estos giros se explican por las condiciones del cambio de régimen en 1990, así como por la penetración ideológica del neoliberalismo en los principales centros de estudio ligados al partido (CIEPLAN y el Centro de Estudios para el Desarrollo). (Puryear, 1994). En este contexto, Aylwin después de 1989, se aproximó hacia el *mainstream tecnopolítico*, contribuyendo a proyectar el régimen heredado y llegando a sostener creencias congruentes con el pensamiento ideológico a la sazón hegemónico. Así, en 1992, afirma:

*La vocación de libertad de pueblos y personas se expresa, en lo político, en la búsqueda de democracia como modelo institucional y forma de convivencia colectiva, y en lo económico, en el auge de las economías de mercado y la reducción del rol estatal en este ámbito (Aylwin, 1992).*

La ruptura ideológica observada en la DC a fines de la década de 1980 constituyó una acomodación necesaria para mantener bajo control los costos de una ruptura profunda con el régimen autoritario y en un contexto de opinión pública mayoritariamente favorable al modelo de desarrollo. Por tanto, estos desplazamientos adaptativos no constituyeron abusos “decisionistas” si se repara en la fuerte adaptación de la sociedad chilena a la economía de mercado (Tironi, 1990). En esta dirección, el gráfico 1 muestra una alta identificación social con el modelo de “libre comercio” frente a la alternativa de la economía basada en planificación estatal.

GRÁFICO 1. IDENTIFICACIÓN CON MODELO DE DESARROLLO



Fuente: Encuesta CEP, septiembre-octubre 1991. Pregunta 27\_3 (Encuesta urbana, equivalente al 47% de la población)

En sus últimas cuentas públicas, Aylwin profundizó su adhesión a las categorías tecnoeconómicas, valorizando conceptos como estado mínimo, crecimiento económico, empresa privada y libre competencia. De esta manera, se afirmó la derogación de la matriz doctrinaria original de la Democracia Cristiana, asumiendo que la economía abierta y la “creatividad de la empresa privada” constituirían los “principales motores del crecimiento económico” (Aylwin, 1993). En esta perspectiva, una de las tareas relevantes para el Estado en los próximos años, según Aylwin, debía ser “el perfeccionamiento de la competencia entre los agentes económicos” (Aylwin, 1993).

A pesar de que algunos análisis sostienen otra cosa (Huneus, 2000), desde 1973 a 1990, la DC se desplazó desde un carácter purista, populista y comunitarista hacia una matriz coalicional, tecnocrática e individualista. Este proceso estuvo condicionado por cambios importantes a nivel internacional, de cultura política interna y por cambios en la racionalidad estratégica de los partidos concertacionistas. A poco tiempo de haber concluido el gobierno de Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle en un discurso frente a la Junta Nacional del PDC, corroborando el nuevo “tropos” liberal del partido, interpelaba a la asamblea preguntándoles: “¿Alguien desea reemplazar el crecimiento por ilusiones? ¿Alguien piensa que es viable un desarrollo nacional hacia adentro? ¿Alguien quisiera volver al Estado a veces empresarial y a veces populista?” (Frei, 1995).

## Ingeniería política y estrategia

La recepción de la transitología y la tecnopolítica cristalizó, durante los inicios de la Concertación, en la formación del Comité Técnico por el NO (1988), coordinado por Genaro Arriagada, y se consolidó con el trabajo de las comisiones coordinadas por la dupla Enrique Correa-Edgardo Boeninger (Boeninger, 1997). El Comité Técnico fue un espacio compuesto por científicos sociales de todas las tendencias de la Concertación por el No, para elaborar el “Plan estratégico” frente al plebiscito<sup>7</sup>. En esta misión, el Comité Técnico contó con la colaboración de expertos estadounidenses del National Democratic Institute y del National Endowment for Democracy (Boeninger, 1997: 343-344). Por su parte, el trabajo de Enrique Correa y Edgardo Boeninger, para la sistematización programática de la coalición en 1989, tuvo por objetivo definir una estrategia viable para los próximos años de gobierno.

Estos espacios de ingeniería política permitieron el encuentro de intelectuales de los centros de estudio de la oposición reformista a Pinochet en torno al desafío de constituir, en su momento, oposición eficaz y luego gobierno estable, a partir de los aprendizajes históricos y la producción de conocimiento incoada durante los años ochenta (Puryear, 1994; Mella, 2008). Los intelectuales provistos de mayor capital epistémico, experticia técnica y vinculaciones internacionales, prevalecieron sobre las interpretaciones más intuitivas de la realidad social. De este modo, se abrió paso en la gramática del Estado a conceptos y autores “iconoclastas”, distanciados de las narrativas partidistas tradicionales, que reconstruyeron el pensamiento de la izquierda reformista “después del diluvio” del autoritarismo y del colapso internacional de los “socialismos reales” (Santiso, 2006).

Al momento de constituir gobierno, estas trayectorias “atípicas” de ministros y subsecretarios establecieron un componente de transversalidad y pluralismo fundamental para la consolidación y mantenimiento de la coalición de respaldo. En áreas estratégicamente sensibles como el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) y la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB), se evidenció la presencia de “binomios” o “tríadas” de ministros y/o subsecretarios con alto nivel de coordinación. Un lugar destacado en esta articulación transpartidaria tuvo, por ejemplo; el equipo de los ministros Edgardo Boeninger (SEGPRES) (DC) y Enrique Correa (SEGGOB) (PS); así como dentro de la SEGPRES, el equipo conformado por Ricardo Solari (subsecretario) (PS), Ángel Flisfisch (PPD), Pedro Correa (PAC), Jorge Rosenblut (PPD) e Ignacio Walker (DC). (Boeninger, 1997: 453).

Desde la perspectiva de la coordinación para la toma de decisiones, se establecieron mecanismos para reforzar la vinculación entre el componente político y técnico de las políticas. Para ello, se instituyeron comités interministeriales y comités ad hoc; en la relación Ejecutivo-Legislativo, como también, reuniones entre

---

<sup>7</sup> Entrevistas sostenidas por el autor con Enrique Correa, 15 de mayo de 2008, y con Ángel Flisfisch, 29 de julio de 2008.

ministros políticos y directivas de partidos con representación parlamentaria. Por su parte, las relaciones del Ejecutivo con los parlamentarios de la coalición se formalizaron mediante las siguientes actividades: i) reuniones semanales de ministros políticos con jefes de partido y ii) comisiones bipartitas sectoriales (ministros del sector con comisiones parlamentarias permanentes vinculadas al tema). (Boeninger, 1997: 454)<sup>8</sup>.

Para Boeninger, los actores políticos, se caracterizaban por su aversión al riesgo, por lo cual, la “buena política” sería aquella que permite tomar decisiones con resultados relativamente predecibles. Entre las variables que posibilitaban condiciones favorables para la acción, identificaba la capacidad gubernamental para generar estabilidad política, crecimiento económico y paz social (Boeninger, 1997). Se aprecia como denominador común en los trabajos de Boeninger (1984: 7; 1997: 26-27), una interpretación del proceso político chileno que valoriza las coyunturas históricas donde se alcanzó orden en estos tres niveles.

Bajo esta amplia convergencia, el uso de la noción de gobernabilidad permitió trazar una fuerte divisoria práctica entre lo legítimo y lo bastardo. Concretamente, significó la oportunidad de justificar el control punitivo sobre las acciones desestabilizadoras de los grupos saboteadores del orden que se mantenían en la tesis de la insurgencia armada como el MIR, el FPMR y el movimiento MAPU-Lautaro (Rosas, 2004). Patricio Aylwin defendió el control, también por vía represiva, de las múltiples caras del maximalismo estratégico y programático con presencia en sectores de la izquierda, cuando sostiene:

*Son tarea esencial e ineludible de todo Gobierno la defensa de la seguridad interior y el resguardo del orden público. [...] Aunque [...] la enorme mayoría del país repudia esos procedimientos, su origen se encuentra, por una parte, en concepciones ideológicas extremistas, de distintos signos, que preconizan la vía armada como método de acción política —en franco retroceso hoy en Chile y en el mundo—, y por otra parte, en la secuela dejada por anteriores hechos de violencia y actuaciones represivas que se tradujeron en graves violaciones de derechos humanos y que jamás se han esclarecido. Aunque no se trate de una situación generalizada, como ciertos sectores se empeñan en hacerlo creer, sino más bien de hechos aislados y de grupos muy minoritarios, el Gobierno tiene la firme decisión de emplear todos los medios legítimos a su alcance para combatirlos (Aylwin, 1990c).*

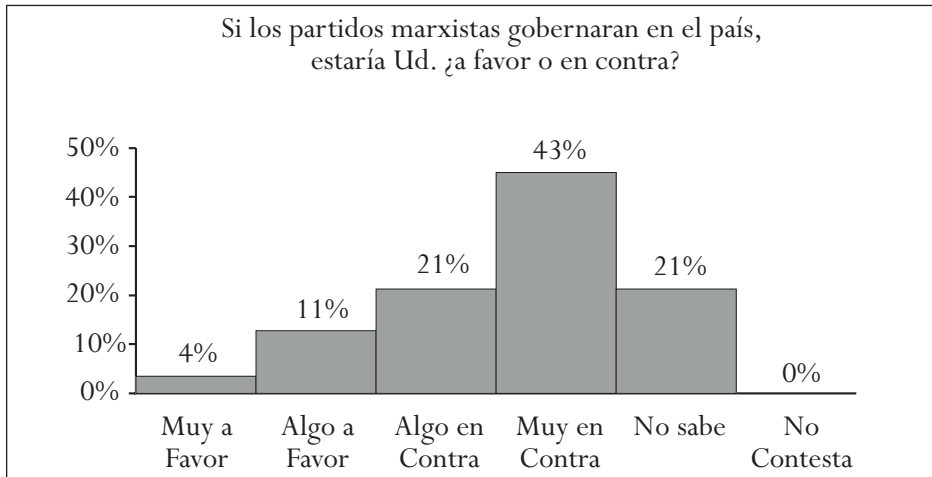
Además de las motivaciones estratégicas, el gobierno dispuso de información empírica sobre el estado de la opinión pública que, en general, reafirmó la tesis de la represión contra las “concepciones ideológicas extremistas”. El gráfico 2 muestra los resultados de la encuesta de opinión pública CEP, para mayo y junio de 1988, en la que se pregunta sobre la percepción de los chilenos frente a los

---

<sup>8</sup> Entrevistas sostenidas por el autor con Ángel Flisfisch, 29 de julio de 2008, y con Edgardo Boeninger, 24 de octubre de 2008.

partidos de la izquierda extraconcertacionista. Frente a la pregunta: “Si los partidos marxistas gobernarán en el país, ¿estaría usted a favor o en contra?”, 64% responde estar “algo en contra” o “muy en contra”. Resulta de interés que este enunciado de la pregunta (referida a percepción frente a “partidos marxistas”), se aplica solamente en las encuestas del CEP correspondientes a mayo-junio de 1988 y septiembre de 1988 (en la encuesta de diciembre de 1988 se reformula la pregunta por: “Si los partidos de izquierda gobernarán el país, ¿estaría usted a favor o en contra?”). Del mismo modo, frente a la pregunta: “¿Está usted a favor o en contra de que el Partido Comunista participe en el proceso democrático?”, 50% de los encuestados dicen estar “algo en contra” o “muy en contra” (ver gráfico 3). Cabe hacer presente que esta pregunta se formula en la encuesta CEP mayo-junio de 1988 y no vuelve a ser incluida en estudios posteriores.

GRÁFICO 2. OPINIÓN FRENTE A PARTIDOS MARXISTAS

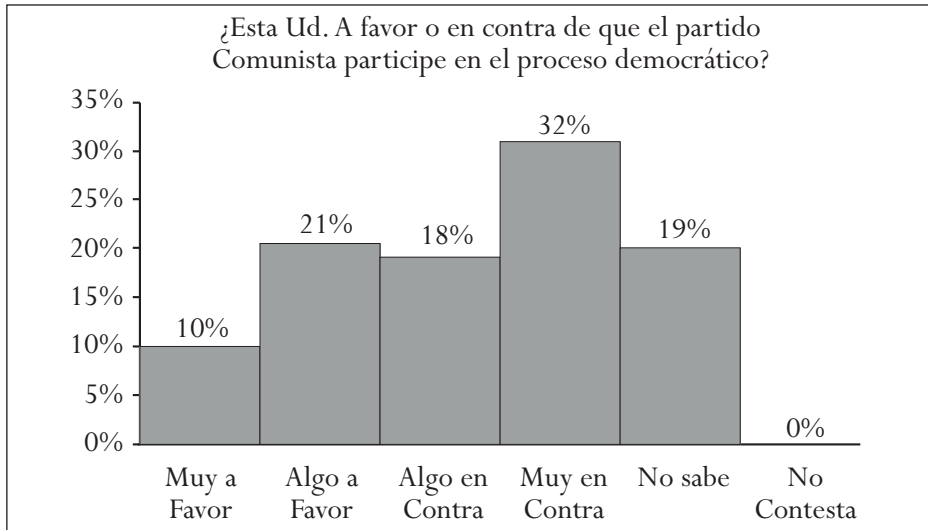


Fuente: CEP-Encuesta Opinión Pública. Mayo-junio 1988, pregunta 66

Las decisiones políticas y estratégicas del gobierno de Aylwin, y la evaluación de costos y riesgos de las acciones persecutorias, se apoyaban en fuerte evidencia favorable a la estrategia gradualista. Con este respaldo, el primer gobierno concertacionista gestionó la exclusión y desarticulación de los sectores “maximalistas”, así como de diferentes modalidades de contestación social.



GRÁFICO 3. OPINIÓN FRENTE AL PARTIDO COMUNISTA



Fuente: CEP-Encuesta Opinión Pública. Mayo-junio 1988, pregunta 65

Aylwin se ocupó de impedir la politización de asuntos de alta complejidad, como fue la desarticulación de organizaciones que persistían en la estrategia de la lucha armada y de la subversión, mediante una estrategia enunciativa de apropiación. Convertir temas de alto potencial polarizador en “cuestiones de Estado”, teniendo a la vista la oportunidad brindada por el rechazo de la opinión pública frente al maximalismo, evitó la ventaja sectorial y obstaculizó la instrumentalización partidaria. Esta condena frente a la acción política de “extremistas” y “saboteadores” del proceso, estuvo respaldada por el clima social de gradualismo y de rechazo a organizaciones proclives al uso de la violencia. En mayo de 1991, el presidente Aylwin promovía una convergencia partidaria para constituir un “núcleo consolidador” (Campero y Cortázar, 1988), como se observa en la siguiente cita:

*La definición de las políticas contra el terrorismo es una cuestión de Estado. No puede ser asumida con criterios partidistas, según lógicas electoralistas o en términos de un campo de confrontación entre Gobierno y Oposición. Necesitamos en esta materia del más amplio consenso. Por esa razón, [...] convoqué a las directivas de todos los partidos con representación parlamentaria para solicitarles su colaboración a fin de que el país enfrente unido al terrorismo, única forma de aislar a sus actores. El Gobierno celebra la constitución de comisiones parlamentarias que participan en el estudio y definición de las estrategias de lucha antiterrorista, y confía en que el examen conjunto del tema conduzca a un consenso en que todos los demócratas nos comprometamos a fondo renunciando a utilizarlo como factor de eventuales ventajas partidistas (Aylwin, 1991).*

Discursivamente, Aylwin trazó líneas de continuidad entre las categorías “delincuencia”, “violencia política” y “terrorismo”, redefiniendo los márgenes de la política de la transición. Hechos como el atentado contra el general (R) Gustavo Leigh (21/03/1990), el asesinato del coronel de Carabineros Luis Fontaine (10/05/1990) (exdirector de la Dicomcar), el asesinato del senador Jaime Guzmán (01/04/1991) y el secuestro de Cristián Edwards (09/09/1991 al 01/02/1992), fueron objetivados por el gobierno como acciones de sabotaje frente al régimen democrático. Dichas acciones, en su mayoría reivindicadas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), constituyeron una expresión de la continuidad en la línea insurreccional que amenazaba la hegemonía estratégica gradualista de la Concertación.

En el discurso del 21 de mayo de 1991, el presidente Aylwin destacaba la necesidad de alcanzar acuerdos amplios para: i) respaldar la exclusión política de los actores radicalizados *que procuran imponer la violencia en la vida colectiva* y ii) fortalecer el *compromiso incondicional de todos los actores* con las instituciones y procedimientos democráticos. Persiguiendo estos propósitos, el gobierno generaría una institucionalidad encargada de abordar el problema de la violencia política y el terrorismo. Inicialmente, se creó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior. Tiempo después se reemplazó este organismo por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, conocida como “La Oficina”, que funcionó bajo la autoridad del demócratacristiano Enrique Krauss, por entonces ministro del Interior, y del socialista Marcelo Schilling (Aylwin, 1993).

Ya hacia 1990, en conocimiento del rechazo social frente a la violencia política, que aparecía en encuestas de opinión pública, Patricio Aylwin advertía acerca del “maniqueísmo moral” existente en la clase política que impedía reconocer las responsabilidades transversales en la persistencia de la lógica del enfrentamiento.

*Algunos sólo ven la violencia subversiva, y justifican o nada dicen frente a la violencia represiva. Otros sólo condenan esta última y legitiman la primera. [...] Para unos, todo crimen es obra de revolucionarios marxistas-leninistas; para otros, quienes los cometen son siempre aparatos represivos al servicio de intereses reaccionarios. La experiencia demuestra lo contrario. ¿Fueron acaso los mismos los asesinos del general Schneider y de Edmundo Pérez? ¿Fueron los mismos los asesinos del general Prats, de Orlando Letelier, del general Urzúa y del coronel Fontaine? ¿Son los mismos que atentaron contra el general Pinochet, los que mataron a Tucapel Jiménez, los que intentaron asesinar a Bernardo Leighton o los que atentaron contra el general Leigh? ¿Son los mismos los que asesinan carabineros y los que degollaron a Parada, Guerrero y Nattino? (Aylwin, 1990c).*

Aunque la estrategia represiva ocupó un lugar principal en el enfrentamiento con las organizaciones partidarias de la lucha armada, una segunda línea de acción gubernamental estuvo dada por el despliegue comunicacional tendiente a “confirmar el *statu quo*” de la opinión pública (McQuail, 1985: 552-553). El

mantenimiento del rechazo de la violencia demandó del gobierno una atención prioritaria sobre la construcción simbólica de la realidad, utilizando para ello narrativas que invisibilizan las lógicas de la resistencia y “desviación” política (Hall, 1977). Estos procedimientos de “reelaboración cognitiva” se observaron, hacia 1991, en la ofensiva gubernamental contra las organizaciones “terroristas”:

*La prevención y represión eficaces del terrorismo exigen también un cambio en la mentalidad colectiva de muchos sectores de la sociedad. Probablemente, hay quienes siguen viendo en la acción terrorista o violentista la obra de idealistas o héroes románticos, o que la miran con lenidad en razón de consideraciones sociales o económicas. Necesitamos de una decidida acción educativa y cultural que persuada a los chilenos de que el terrorismo es sinónimo de delincuencia, y que contribuir a prevenirlo o al progreso en la investigación de hechos terroristas no es un acto censurable, sino una expresión de coraje cívico y de preocupación por el bien común (Aylwin, 1991).*

Por tanto, la llegada de estos nuevos cuadros técnicos y políticos (*tecnopols*) a la alta administración del Estado, caracterizados por una adscripción política más débil y por creencias iconoclastas frente a los proyectos históricos de los partidos chilenos, contribuyó decisivamente a la desactivación del núcleo revolucionario y de actores proclives a la contestación social por la reproducción social de la cultura e instituciones autoritarias.

## Política de los acuerdos

La administración de Aylwin impuso una honda transformación en la racionalidad política de la Democracia Cristiana y los demás actores de la coalición gubernamental, privilegiando las lógicas adaptativas y la convergencia partidaria. Los procesos de integración horizontal —entre partidos— en el sistema político fueron prioritarios respecto de los esfuerzos por mayores niveles de integración vertical —entre partidos y actores sociales—, dejando atrás la ausencia de propensión cooperativa y coalicional que caracterizó tanto a la DC como al PS durante el gobierno de la UP (Flisfisch, 1984).

El uso gubernamental del consenso durante el período de Aylwin transformó los modos de entender las prácticas políticas. Como efecto de lo anterior, se sustituyó una cultura política de la decisión en base a principios, por una nueva que diluyó las convicciones partidarias en los acuerdos cupulares y la integración horizontal. Dicha forma de resignificar la decisión, surgió de una racionalidad estratégica conducente al “control de daños” y a la evitación de la sobrecarga en las demandas sociales con el objetivo de maximizar el grado de gobernabilidad de la transición (Monedero, 2012). Con los aportes de los intelectuales de la convergencia durante los años ochenta, se estableció un “saber estratégico canónico” que sometió los fines de la acción a las oportunidades y los medios disponibles (Elster, 1995; Flisfisch, 1984 y 1987).

La preeminencia del consenso y el gradualismo condujo a la pérdida de centralidad de aquellas narrativas leninistas o de acción insurreccional, calificadas como formas de resistencia o disidencia que no alcanzaron a convertirse en una “oposición propiamente tal” (Garretón, 1988). Según Garretón (1988), la oposición propiamente tal debería ser capaz de impulsar la superación del régimen autoritario, objetivo asumido como tarea principal para el gobierno de Aylwin, definido como “de transición”.

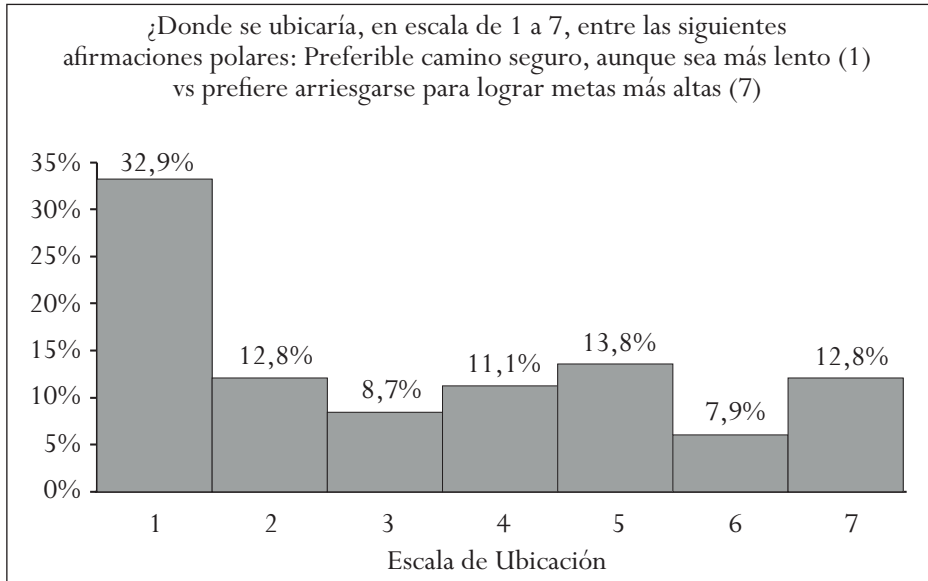
Los desplazamientos estratégicos enunciados por Aylwin desde 1990 perseguían “derrotar al autoritarismo en su propia cancha”, evitando los riesgos de “violencia, sufrimiento y pérdida de vidas” (Aylwin, 1990b). En esta senda, el presidente, en su discurso del 21 de mayo de 1990, señalaba:

*Justo es reconocer que esta nueva y promisoria realidad ha sido posible, en gran medida, gracias a la disposición y conducta responsable de quienes aceptamos someternos a reglas del juego que rechazábamos por la forma en que fueron impuestas y por su contenido a nuestro juicio injusto y antidemocrático; y también, gracias a quienes acataron esas reglas cuando su aplicación les resultó adversa y se sometieron al veredicto ciudadano. La democracia supone, como cimiento indispensable, el consenso general sobre las reglas fundamentales de la convivencia colectiva. Puesto que en ella la autoridad se funda en la voluntad de aquellos a quienes obliga, única manera racional de conciliar autoridad con libertad, el régimen democrático será más sólido y estable mientras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en la comunidad nacional (Aylwin, 1990c).*

Para el primer gobierno de la Concertación, el momento, la dinámica y la profundidad del cambio institucional estuvo determinado por las oportunidades políticas. Vale decir, el gobierno buscó que las reformas no alteraran el orden social del país, ni la dirección del proceso transicional. La tesis de la *política de los consensos* condicionaba la implementación del programa a la existencia de un respaldo parlamentario de supermayoría. Sin embargo, la “ventana de oportunidad” para implementar las reformas se redujo, cuando las encuestas de opinión pública descubrieron una mayoría social inclinada al gradualismo y a una gestión conservadora. El gráfico 4 muestra que durante los inicios del gobierno de Aylwin, la sociedad chilena preferentemente optaba por un proceso con riesgos controlados y baja incertidumbre<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Se debe consignar que la pregunta: “¿Dónde se ubicaría, en escala de 1 a 7, entre las siguientes afirmaciones polares: Prefiere camino seguro, aunque sea más lento (1) vs. Prefiere arriesgarse para lograr metas más altas (7)?”, solo se incluye en la encuesta CEP correspondiente a septiembre-octubre de 1991.

GRÁFICO 4. SEGURIDAD VS. RIESGO



Fuente: Encuesta CEP, septiembre-octubre 1991

Hacia 1992, bajo la coordinación de Edgardo Boeninger, se definió una agenda de reformas políticas en base a tres documentos que habían sido objeto de acuerdos previos por sectores relevantes de la clase política: el Acuerdo Nacional de 1985, las Bases de sustentación para la Gobernabilidad de 1986 y el trabajo de las Comisiones Técnicas de 1989. Los acuerdos alcanzados por el trabajo de Boeninger se materializaron en una agenda común de siete puntos entre gobierno y oposición. Entre los puntos figuraban: i) La reforma del sistema electoral binominal por uno de tipo proporcional; ii) La reducción del quórum requerido para modificar la Constitución; iii) Una mayor participación de civiles en el COSENA; iv) Una nueva composición del Tribunal Constitucional con mayor injerencia del Congreso; v) El restablecimiento de la facultad presidencial de remover a los comandantes en Jefe; vi) El aumento de la cantidad de diputados y senadores; y vii) La eliminación de los senadores designados. (Boeninger, 1997: 162).

La mayor parte de estas reformas se desdibujaron o fueron rechazadas por la derecha durante 1992, mostrando las limitaciones de la *política de los consensos* como fórmula democratizadora. Antes de ese año, la *política de los consensos* había permitido avanzar con la colaboración de sectores liberales de RN en objetivos políticos y estratégicos como elaboración de plataformas (programáticas) entre partidos sin tradición de colaboración, constitución de la Comisión de Verdad y Reconciliación, establecimiento del acuerdo marco entre empresarios y trabajadores, entre otros (Boeninger, 1997).

Desde ese momento, se manifestaron para el gobierno los límites en la gestión programática y se expresó crecientemente la tensión entre pacto de transición y límites del proyecto concertacionista. En este período, los obstáculos para los acuerdos surgían cuando los actores estratégicos comprometidos con la mantención del *statu quo* percibieron que las reformas no eran meramente “formales” y modificarían las correlaciones de fuerzas. Como ejemplos de las restricciones impuestas por la política de los acuerdos, se consignan el fallido intento de reforma al sistema electoral y la imposibilidad de restituir la facultad presidencial de remoción de los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el cumplimiento de los objetivos iniciales del gobierno se encadenaría a la participación de comunidades de expertos capaces de crear propuestas de política viables y funcionales al proceso transicional (Monedero, 2012). En este punto, señalaba que la incorporación de temas sustanciales a la agenda del gobierno requeriría “un consenso ampliamente mayoritario” entre especialistas, centros de estudio, partidos y medios de comunicación, de manera que la opinión pública pudiera disponer de conceptos y posiciones nítidas y “debidamente maduras” (Aylwin, 1990c).

Esta clase de narrativas tecnocráticas y elitistas contribuyeron a fracturar, cada vez más, la relación de la coalición oficialista con la izquierda extra Concertación. Una de las manifestaciones donde aparecía esta narrativa de sobreadaptación fue el acatamiento de la Constitución de 1980, inicialmente factor de fragmentación entre los opositores, luego relativamente excluida del debate público, por ser condición de posibilidad del proceso mismo. En esta materia, Aylwin señalaba en 1991:

*No existe la menor posibilidad de que la Constitución sea “desmantelada”. Mi gobierno carece de la mayoría parlamentaria requerida para aprobar, sin la concurrencia de senadores institucionales o de oposición, ninguna reforma constitucional. La viabilidad de futuras reformas está condicionada, en esta etapa por lo menos, a que se alcance consenso para llevarlas a cabo. [...] Como el planteamiento de esas reformas formó parte del Programa de Gobierno con que fui elegido, considero un compromiso mío con el pueblo de Chile proponerlas durante mi período. La oportunidad en que lo haga dependerá de las circunstancias, en especial de los acuerdos que, a su respecto, puedan irse produciendo (Aylwin, 1991).*

Más allá del respaldo social circunstancial hacia la política de los acuerdos, se observaron consecuencias no deseadas en el mediano plazo. Estos impactos fueron advertidos y destacados tempranamente, en mayo de 1993, con motivo del último discurso de Aylwin frente al Congreso pleno, a saber: i) la tendencia a la oligarquización del sistema político; ii) la desvinculación de la ciudadanía respecto de la política institucional; y iii) la ilegibilidad de los procesos decisionales para el conjunto de la sociedad (Aylwin, 1993).

## Enunciación y hegemonía

Aunque no menoscaba la importancia de la Concertación como “máquina electoral”, buena parte de la condición hegemónica de esta coalición descansó en su control (oligopólico o monopolístico) de la producción de representaciones simbólicas (Lechner, 1984). Como señala Lechner, para un actor que se define por su oposición al *statu quo*, la “lucha por transformar el mundo” implica una “lucha por los códigos interpretativos de ese mundo” (Lechner, 1984: 135).

En su condición de líder de la coalición antiautoritaria, Aylwin elabora una narrativa para imponer el clivaje constituyente de la transición, generando la proyección de la experiencia de resistencia contra Pinochet en una narrativa mistificadora y la penetración psicológica del pasado en un presente histórico sucesivo. El presidente Aylwin, refiriéndose a su capacidad de nominación del pasado, decía en 1990: “(...)

*Nadie puede impedirnos decir la verdad cada vez que lo estimemos necesario, con delicadeza y a la vez con firmeza, como lo estamos haciendo. Nadie puede ofenderse porque se diga que en Chile hubo dictadura; es tan sólo llamar las cosas por su nombre (Aylwin, 1990c).*

Si nominar o representar la realidad hizo posible activar políticamente sujetos funcionales a la nueva estructura de dominación y desactivar a los sujetos disfuncionales, también posibilitó el reemplazo del clivaje derecha/izquierda, por la oposición autoritarismo/democracia. Esta última oposición conceptual, provista de performatividad por las condiciones históricas específicas del proceso chileno, permitió reconstituir legitimidad para las narrativas políticas en uso, debido a que reproduce las posiciones y “actitudes” de los actores institucionales.

Fueron estas narrativas dicotómicas las que generaron cohesión, sentido colectivo y configuraron el contenido básico del anclaje y posicionamiento partidario. Al mismo tiempo, estas narrativas ocultaron las fuertes líneas de continuidad entre el régimen saliente y el entrante, así como la ausencia de un programa reformista viable en la coalición antiautoritaria. Algunas de estas continuidades que aparecieron como el *trade-off* de la transición pactada chilena, consistieron en la persistencia de condiciones “estructurales” de violencia (Galtung, 1995), producidas por mantenimiento de la institucionalidad autoritaria, vulnerabilidad, pobreza extrema, exclusión y represión estatal (Tironi, 1990).

Las decisiones del gobierno en relación a la integración o exclusión de actores y los modos de enfrentar la marginalidad social, consideró las evidencias sobre los efectos de la estrategia modernizadora del autoritarismo. Sabemos que para el desarrollo político chileno durante el siglo XX resultó determinante la articulación de los partidos de clase con las organizaciones obreras (Urzúa-Valenzuela, 1992), (Angell, 1974), (Roberts, 2002). Con la implementación del modelo de desarrollo autoritario, se produjeron cambios profundos en la estructura social con implicancias en la cultura política, entre estos: i) la desarticulación y

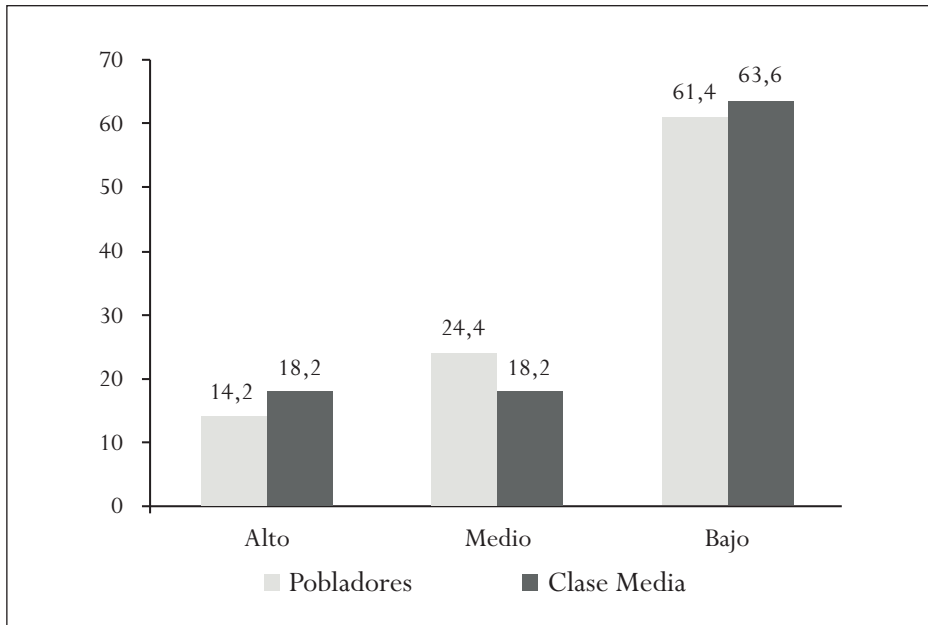
decadencia de la clase media; ii) el debilitamiento del sindicalismo; y iii) la aparición de nuevos segmentos de marginalidad (Tironi, 1990: 157 a 175).

Cada uno de los quiebres en la articulación de partidos con actores sociales, producidos durante el gobierno de Aylwin, estuvieron fundados, por una parte, en la erosión de las identidades de clase, manifestada en el carácter regresivo del militatismo y la sindicalización, y por otra parte, en la creciente demostración de que la pobreza no inducía la violencia (Tironi, 1990). Eugenio Tironi, fundador de SUR Profesionales y director de Comunicaciones del gobierno de Aylwin, sostenía que la orientación a la violencia de los pobres, así como su propensión revolucionaria o insurreccional, son creencias sin mayor respaldo empírico. Al contrario, los estudios científicos permitirían concluir que los grupos marginales: i) se orientan a la integración y la movilidad, más que a la ruptura con el orden social; ii) buscan más la protección del Estado que la autonomía; y iii) poseen inclinación hacia el reformismo político y no a los métodos violentos y radicales (Tironi, 1990: 181).

En este sentido, el gráfico 5 muestra la frecuencia —en porcentajes— de los grupos segmentados por clase social que manifestaron orientación a la violencia (Índice de Orientación a la Violencia, IOV). Se observa en 1990 que solo 14,2% de los pobladores posee alto IOV (clase media IOV 18,2%), mientras 61,4% bajo IOV (clase media IOV 63,6). Lo anterior permitiría concluir, según Tironi, que la orientación a la violencia no es más intensa a medida que se baja en la escala social. Vale decir, pobladores y marginales poseen una menor orientación al uso de la fuerza en situaciones de conflicto, respecto de otros segmentos sociales (por ejemplo, como se muestra en el gráfico, respecto de la clase media). Esta evidencia contradice la hipótesis de una correlación negativa entre estatus y disposición a la violencia.



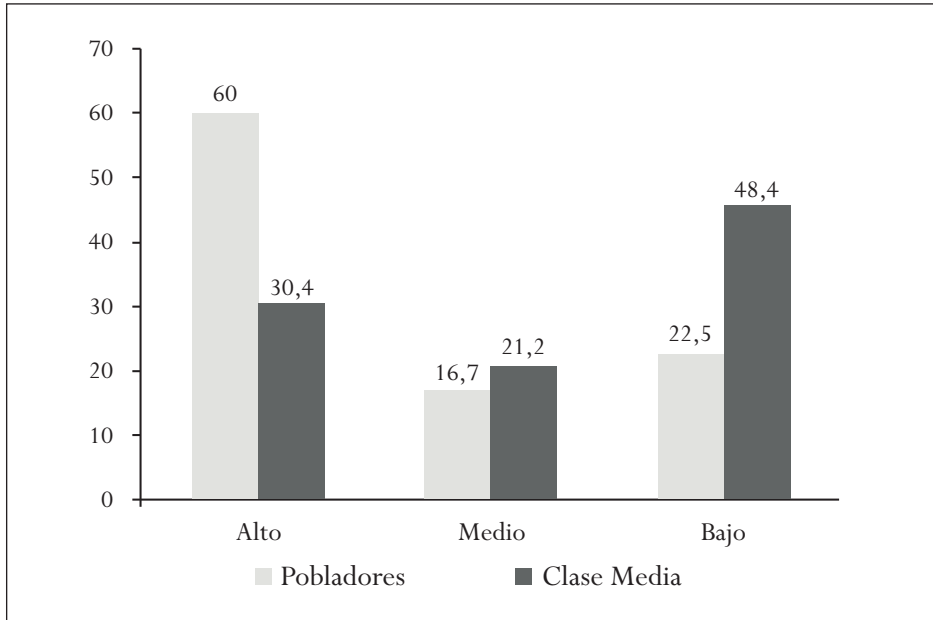
GRÁFICO 5. ÍNDICE DE ORIENTACIÓN A LA VIOLENCIA (IOV)



Fuente: Tironi, 1990

El gráfico 6, por su parte, muestra las frecuencias —en porcentajes— de sujetos que manifestaron una actitud conformista y resignada frente a la estrategia de modernización implementada por el régimen autoritario (Índice de Conformismo/Resignación, ICR). Esta actitud de conformismo o adaptación debía relacionarse, según Tironi, de modo inverso con la frustración, y por tanto, debiera explicar la discrepancia entre expectativas y resultados, en términos de capacidades individuales (Tironi, 1990: 188-191). Se observa que existe hacia 1990 un alto nivel de conformismo entre los pobladores (ICR, 60%), mayor que en la clase media (ICR, 30,4%), mientras que los niveles menores en el ICR corresponde a la clase media (ICR, 48,4%), lo cual significa mayor probabilidad de adaptación entre los pobladores y mayor frustración y probabilidad de uso de la violencia en sectores medios.

GRÁFICO 6, ÍNDICE DE CONFORMISMO/RESIGNACIÓN (ICR)



Fuente: Tironi, 1990

Con todo, y a pesar de las evidencias disponibles, Patricio Aylwin recuerda la inquietud que ocasionaron las problemáticas heredadas como la situación de los pobladores sin casa y los allegados:

*Yo pensaba con fundamentos que al día siguiente o la noche en que asumía el mando, se iban a iniciar tomas de terrenos eriazos en Santiago, Valparaíso, Concepción. [...] Había unas organizaciones de pobladores sin casa, todas capitaneadas por dirigentes comunistas, que tenían coordinado un programa. Y se lo confesaron a Alberto Etchegaray, quien, inmediatamente de nombrado, en enero, comenzó a tomar contacto con el mundo poblacional. Y él les dijo que se calmaran: Vamos a hacer tales y tales cosas, y con ustedes. Pero yo, de todas maneras, tenía mis miedos (Serrano y Cavallo, 2006: 273-274).*

La existencia de sectores marginados y sometidos a “violencia estructural” que no experimentaron mejoras significativas con la mudanza de régimen, demandó del gobierno la elaboración de estrategias alternativas de control sobre estos grupos. Un mecanismo que operó en esta dirección, fue el uso de la persuasión o cooptación emocional frente a grupos disfuncionales o potencialmente contrapuntivos. En esta materia Aylwin señalaba:

*Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante estos largos años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a la democracia la pronta solución de sus problemas, muchas veces angustiados. Yo comprendo su urgencia y los invito a comprender también que —como lo dije insistentemente en la campaña electoral— necesitaremos tiempo y mucha colaboración. Si han soportado tantos años de espera forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional (Aylwin, 1990b).*

La representación “selectiva” como fórmula para objetivar intereses y sujetos, constituyó otra estrategia para consolidar una posición enunciativa hegemónica, frente a una fuerte continuidad en las condiciones materiales. De tal modo, los intereses legitimados por el gobierno originaron sujetos que estuvieron en mejor posición enunciativa para politizar sus demandas. Un modelo de representación con estas características tenía una inclinación hacia lo colectivo que lo apartaba del neoliberalismo ortodoxo, donde los únicos intereses legítimos y politizables eran los intereses individuales de los ciudadanos (Held, 1991: 188-224). Pero al mismo tiempo, esta estrategia de legitimación selectiva se distanció de una concepción pluralista, donde todos los intereses sociales deberían poder competir por la inclusión en igualdad de condiciones y sin filtros discrecionales (Held, 1991: 225-246; Dahl, 1989).

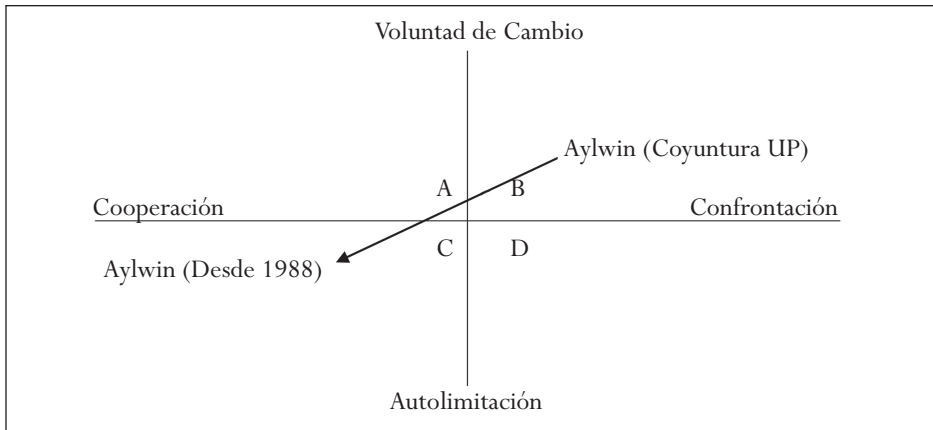
El gobierno de Aylwin incluyó, por vía de representación, demandas afines a la transición chilena, en el contexto de la erosión de las identidades de clase y de las subculturas partidarias. En el discurso del 21 de mayo de 1990 se visualizan cinco sujetos legitimados discursivamente como actores estratégicos por el gobierno de Aylwin: municipios, organizaciones comunitarias, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Estos sujetos facilitaban la focalización gubernamental en respuesta a actores con demandas previamente articuladas y provistos de cierta capacidad de presión (Aylwin, 1990c).

La objetivación de intereses comportaba discrecionalidad en la inclusión de demandas y en la función de *gatekeeper* de los partidos de la Concertación. Como la validación gubernamental de intereses determinaba la existencia política de los sujetos, entonces, la integración suponía cierto grado de cooptación “desde arriba”. La integración, el compromiso y el acatamiento de los actores se apoyaba, por lo tanto, en la fuerza desmovilizadora, en el despliegue de mecanismos clientelares y en el control (monopólico u oligopólico) de la producción ideológica. En caso de existir intereses disfuncionales persistentes, correspondía al gobierno aplicar coerción o reformular en el mediano plazo los mapas cognitivos de los actores.

## A modo de conclusión

El pensamiento político de Patricio Aylwin desde 1990 estuvo marcado por desplazamientos, desde una lógica de confrontación, orientación a la ruptura institucional en la fase preautoritaria, hasta una lógica de cooperación y con tendencia a la autolimitación, durante los comienzos de la transición a la democracia. El siguiente cuadro (Cuadro 3) ilustra este desplazamiento desde un discurso voluntarista y proclive a la confrontación (coyuntura UP), a uno preferentemente cooperativo y autolimitado (desde 1988), siendo en ambos momentos, lógicas tributarias del contexto histórico político que vivió el país.

CUADRO 3. DESPLAZAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE PATRICIO AYLWIN



A nuestro entender, la ruptura con el imaginario socialcristiano tradicional se justificó, sin olvidar los cambios en el contexto histórico, por la necesidad política de constituir un gobierno representativo de una nueva mayoría social politizada bajo los objetivos estratégicos del proceso transicional. La reflexión autocrítica, respecto de las falencias del modelo doctrinario y táctico de la Democracia Cristiana durante la década de 1960 y, especialmente, durante el gobierno de la Unidad Popular, posibilitó recuperar una posición hegemónica para el partido, levantada —esta vez como partido pivote de la coalición gubernamental— a partir de una racionalidad estratégicamente conservadora que tendió a la autolimitación.

No obstante, no debiera entenderse que esta actitud “adaptativa” y la disposición a la cooperación operaron de la misma manera en todos los planos de la acción gubernamental. Congruente con la discusión teórica desarrollada en los centros de estudio opositores a Pinochet, la autolimitación se combinó con el uso de la ingeniería política para generar control social durante el primer gobierno concertacionista. Esto último se manifestó con la importación de un conjunto de nuevas categorías para la acción y de agentes expertos que expandieron el canon transitológico dentro de la coalición, derogando la narrativa fundacional

democratacristiana y perfeccionando los mecanismos de control sobre los sujetos no asimilados en la arquitectura de la transición. Las narrativas de la representación política fueron subordinadas, por lo tanto, a criterios y necesidades contingentes de convergencia e integración horizontal entre los partidos, derivadas de la necesidad de constituir una coalición de gobierno sustentable.

Se sostiene por otra parte, que la objetivación selectiva de intereses constituyó una respuesta del gobierno de Aylwin frente a los actores estratégicos con cierta capacidad de veto. Entre estos, aparecen como actores estratégicos principales aquellos partidos políticos que aseguraban la gobernabilidad en la coalición de gobierno o en el conjunto del sistema (núcleo consolidador), postergando la articulación con las organizaciones sociales y demás actores extra-institucionales. Los actores sociales articulados históricamente con los partidos, fueron excluidos de la gestión política del gobierno, debido a la estrategia selectiva de integración desplegada por Aylwin y a la evidencia de expertos concertacionistas que cuestionaban su efectiva capacidad de veto. De este modo, el esquema de representación de intereses del primer gobierno concertacionista se aproximó más a una solución, estratégicamente conservadora, que generó una mayoría reforzada entre blandos de la derecha y reformistas en la izquierda moderada. Resulta improbable, en consecuencia, que esta politización selectiva de demandas, con restricciones en la integración horizontal y vertical, significara avances importantes en la instalación (o recuperación) de una cultura democrática participativa y pluralista.

En consecuencia, del conjunto de restricciones que aparecen consignadas en este trabajo como factores claves para el uso del poder presidencial durante el gobierno de Aylwin, solo FF.AA. y empresarios carecían de anclaje por parte de la coalición gubernamental y podrían constituir amenazas efectivas para el avance del proceso transicional. Como se observa en los datos analizados por Tironi, los sectores populares se caracterizaban por una fuerte propensión adaptativa reflejado en el alto grado de conformismo/resignación observada en los grupos de pobladores. Los sectores medios, por su parte, aunque con mayor propensión contradaptativa, fueron proclives a procesos graduales y rechazaron fuertemente las expresiones de radicalidad política, tal como aparece en las encuestas del CEP durante los primeros años de Aylwin.

Como se ha dicho, la estrategia de las “cuerdas separadas” supone el tratamiento no simultáneo de asuntos ligados sustantivamente, por razones de “economía procesal” en la gestión política. Por tanto, la decisión tomada por Aylwin de priorizar la transición por sobre la democratización, tuvo como fundamento: la identificación de actores antagonistas poderosos (empresarios y Fuerzas Armadas), sin mecanismos de articulación con el “núcleo consolidador” y la necesidad del nuevo gobierno de socializar las nuevas narrativas en actores y subactores con capacidad de veto social (penetración del gradualismo y valores de mercado en partidos, sindicatos y pobladores). Bajo estas condiciones, la estrategia de una transición sin democratización se convirtió en el escenario con menor riesgo y por tanto, en una trayectoria racional para el primer gobierno de la Concertación.

## Referencias bibliográficas

- Álvarez, R. (2011). *Arriba los pobres del mundo. Identidad y cultura política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990*. Santiago: Lom Ediciones.
- Angell, A. (1974). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. México DF: Ediciones Era.
- . (2007). *Democracy after Pinochet: Politics, Parties and Elections in Chile*. Londres: Institute for the Study of the Americas.
- Axelrod, R. M. (1984). *The evolution of cooperation*. Nueva York: Basic Books.
- . (1997). *The complexity of cooperation agent-based models of competition and collaboration*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Aylwin, P. (1993). Discurso Presidente ante el Congreso Pleno. 21 de mayo, 1993. Disponible en: [http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo\\_1993.pdf](http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1993.pdf)
- . (1992). Discurso Presidente ante el Congreso Pleno. 21 de mayo, 1992. Disponible en: [http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo\\_1992.pdf](http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1992.pdf)
- . (1991). Discurso Presidente ante el Congreso Pleno. 21 de mayo, 1991. Disponible en: [http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo\\_1991.pdf](http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1991.pdf)
- . (1990c). Discurso Presidente ante el Congreso Pleno. 21 de mayo, 1990. Disponible en: [http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo\\_1990.pdf](http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_1990.pdf)
- . (1990b). Discurso en el Estadio Nacional (12 de marzo)
- . (1990a). Discurso Asunción Presidente. (11 de marzo): [http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/11marzo\\_90.pdf](http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/11marzo_90.pdf)
- Austin, J. (2008). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.
- Bermeo, N. (1992). Democracy and the lessons of Dictatorship. *Comparative Politics*, vol. 24, n° 3 (abril 1992), pp. 273-291. Disponible en: [http://pics3441.upmf-grenoble.fr/articles/auth/democracy\\_and\\_the\\_lessons\\_of\\_dictatorship.pdf](http://pics3441.upmf-grenoble.fr/articles/auth/democracy_and_the_lessons_of_dictatorship.pdf)
- Boeninger, E. (1997). *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad democrática*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- . (1984). La Concertación Política y Social; problema y exigencia de la consolidación democrática. Documento de Trabajo N° 9, CED.
- Campero, G. y Cortázar, R. (1988). Actores sociales y la transición a la democracia en Chile. *Estudios CIEPLAN*, n° 25, Santiago.
- Castañeda, J. (1993). *La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*. Buenos Aires: Ariel.
- Cavallo, A. (1998). *La historia oculta de la transición*. Santiago: Grijalbo.
- Chaisty, P., Cheeseman, N. & Power, T. (2012). *Rethinking the 'presidentialism debate': conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective*. *Democratization*. Londres: Routledge. Disponible en: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13510347.2012.710604>
- Dahl, R. (1989). *La poliarquía. Participación y oposición*. Madrid: Tecnos.
- Elster, J. (1995). Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- . (1997). *Economics*. Barcelona: Gedisa.

- Flisfisch, A. (1983). Coaliciones políticas y transición en Chile: notas exploratorias. *Material de Discusión*, n° 45.
- . (1984). Hacia un realismo político distinto. *Documento de Trabajo*, n° 219.
- . (1987). Los ideales y la izquierda: la racionalidad del cambio. *Documento de Trabajo* n° 355.
- . (1985). Algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile. *Documento de Trabajo*, n° 234. FLACSO. Santiago.
- Frei, E. (1995). Discurso de S.E. el Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle frente a la Junta del PDC. Santiago, 21 de enero de 1995.
- Garretón, M. A. (1988). La posibilidad democrática en Chile: dilemas de transición y consolidación. *Documento de Trabajo*, n° 394. FLACSO. Santiago.
- . (1991). Cultura política y sociedad en la construcción democrática. Serie Estudios Sociales, n° 6. FLACSO. Santiago.
- . (1989). La oposición política partidaria en el régimen militar chileno: Un proceso de aprendizaje para la transición. En Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón (eds.). *Muerte y resurrección: Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur*. Santiago: FLACSO.
- . (1991). La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución. *Estudios Públicos*, n° 42. Santiago, 1991.
- Grayson, G. (1968). *El Partido Demócrata Cristiano de Chile*. Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre.
- Hall, S. (1977). Codage-décodage, *Réseaux*, n° 68, 1994, pp. 27-39. Disponible en: [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso\\_0751-7971\\_1994\\_num\\_12\\_68\\_2618](http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-7971_1994_num_12_68_2618)
- Held, D. (1991). *Modelos de democracia*. Madrid: Alianza.
- Huneus, C. (2000). Los cambios institucionales al sistema económico durante la transición a la democracia en Chile. Del neoliberalismo a la economía social de mercado. *Revista de Ciencia Política*. Volumen XX, n° 2. Universidad Católica de Chile. Santiago.
- Lechner, N. (1984). *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*. Santiago: FLACSO.
- . (2006). *Obras escogidas*. Tomo 1. Santiago: Lom.
- Mcquail, D. (1985). *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*. Barcelona. Paidós.
- Mella, M. (2008). Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo. *Revista Historia Social y de las Mentalidades*. Año XII, vol. 1. Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.
- . (2011). Referentes internacionales para el giro reformista de la izquierda chilena (1975-1990). *Revista Espacios Públicos*, 14 (30). Universidad Autónoma del Estado de México. México.
- . (2011). *Extraños en la noche: intelectuales y usos políticos del conocimiento durante la transición chilena*. Santiago: RIL Editores.
- Monedero, J. C. (2012). El programa de máximos del neoliberalismo: el Informe a la Trilateral de 1975, en *Sociología Histórica*, n° 1, Universidad de Murcia.
- Morlino, L. (2009). *Democracias y democratizaciones*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

- Moulian, T. (1997). *Chile actual: Anatomía de un mito*. Santiago: Lom.
- Moulian, T. y Torres, I. (1988). "Continuidad o cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile", en Varas, A. (comp.), *El Partido Comunista en Chile* Santiago: FLACSO-CESOC.
- O'Donnell, G. y Schmitter, PH. (1988). *Transiciones desde un gobierno autoritario* (vol. 4). Buenos Aires: Paidós.
- Power, T. (2010). Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy. *Bulletin of Latin American Research*, 29 (1): 18-33.
- Przeworski, A. (1995). *Democracia y mercado*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Puryear, J. (1994). *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Raile, E. D., Pereira, C. & Power, T. (2010). The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime. *Political Research Quarterly*. Online First, published on March 4, 2010. doi: 10.1177/1065912909355711. Versión electrónica descargada desde (20-02-2014): <http://polisci.msu.edu/downloads/Raile%20Pereira%20Power%20PRQ%202010.pdf>
- Roberts, K. (2002). El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana. En Cavarozzi, M. y Abal Medina J. (h.), *El asedio de la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario-Santa Fe: Homo Sapiens.
- . (1994). Renovation in the Revolution? Dictatorship, Democracy, and political change in the Chilean Left. Working Paper 203 - March 1994. Kellogg Institute. University of Notre Dame. Disponible en: <https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/203.pdf>
- Rojas, L. (2011). *De la rebelión popular a la sublevación imaginada*. Santiago: Lom.
- Rosas, P. (2004). *Rebeldía, subversión y prisión política*. Santiago: Lom.
- Santiso, J. (2006). *La economía política de lo posible en América Latina*. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Searle, J. R. (1997). *La construcción de la realidad social*. Barcelona: Paidós.
- Serrano, M. y Cavallo, A. (2006). *El poder de la paradoja: 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin*. Santiago: Grupo Editorial Norma.
- Siavelis, P. (2009). Enclaves de la transición y democracia chilena. *Revista de Ciencia Política*, vol. 29, n° 1. Santiago.
- Tironi, E. (1990). Autoritarismo, modernización y marginalidad. Santiago: Ediciones SUR.
- Urzúa-Valenzuela, G. (1984). *Diccionario político institucional de Chile*. Santiago: Editorial Jurídica.



- . (1992). *Historia política de Chile y su evolución electoral. (Desde 1810 a 1992)*. Santiago: Editorial Jurídica.
- Valdivia, V., Álvarez, R. y Pinto, J. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución: izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*. Santiago: Lom.

